

Hacer realidad el cambio – Unidad 2

Historias de cambio procedentes de todo el mundo

Bolivia: La juventud trabaja para cambiar las actitudes sobre el amor romántico

Con el apoyo de la Coordinadora de la Mujer, el Colectivo Rebeldía, el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y Oxfam, miembros de algunos grupos juveniles de Bolivia decidieron analizar las formas en que las vigentes ideas sobre el amor romántico de las personas jóvenes contribuían a los altos niveles de control y violencia contra las mujeres y las niñas existentes en Bolivia, y sobre cómo cambiarlas.

Mediante encuestas y grupos focales dirigidos por jóvenes en los que se debatieron cuestiones que podían ser muy delicadas y personales, el grupo concluyó que a veces la expresión de celos se percibía como señal de “amor verdadero” y, por tanto, se consideraban “algo bueno”. Sin embargo, los celos también constituían un factor fundamental del control y la violencia. Los grupos de jóvenes trabajaron juntos para elaborar y testear una acción de campaña con el objetivo de poner de relieve los peligros de los celos y promover otros comportamientos y actitudes para demostrar amor y tratar a la pareja de forma respetuosa y segura.

Esta campaña, llamada “ACTÚA Detén la violencia” se lanzó en 2017 e incluía acciones *online* y *offline* tales como arte callejero; colaboraciones con artistas de reguetón, practicantes del monopatín y celebridades de la televisión; una colaboración con el sistema de transporte público de La Paz para llegar a miles de personas cada día; acciones coordinadas con las escuelas secundarias; y la creación de *gifs*, memes y una comunidad en Facebook y TikTok. En la campaña participaron 70.000 personas jóvenes, de las cuales el 30% eran varones.

En su esfuerzo permanente por poner en tela de juicio los códigos de género dañinos, la campaña también evidenció que las personas indígenas LGBTQIA+ suelen tener que abandonar sus comunidades nativas para prosperar. Las y los activistas de ACTÚA también colaboraron con creadoras y creadores de contenido y blogs para popularizar mensajes de igualdad de género e inclusión entre la juventud boliviana. Con motivo de Mes del Orgullo de 2022, la campaña se asoció con el artista y activista Wilmar Montero, que representó la “alegría queer” como una familia indígena que puede expresar con libertad su amor y afecto.

Más información en:

[Vídeo #LosCelosNoSonExcusa para ejercer violencia contra mujeres y niñas](#), YouTube

India: Una organización de base lucha por el derecho a la información

En la década de 1990, una organización de base de Beawar —una pequeña ciudad de Rajastán (India)— empezó a hacer campaña para acceder a los archivos públicos en el marco de sus esfuerzos por lograr el pago de los salarios mínimos. Su éxito a la hora de obtener información del Gobierno y poner de manifiesto la corrupción generó un movimiento más amplio en defensa del derecho a la información de toda la población del país. La activista social india Aruna Roy consideraba que esta transparencia era una poderosa herramienta para la defensa de los derechos laborales, los derechos humanos y los derechos ambientales, y contribuía a la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Gobierno hacia las ciudadanas y ciudadanos de a pie.

Los grupos de incidencia se sumaron a activistas individuales, como Shankar Singh y Nikhil Dey, y crearon una base de apoyo formada por personas agricultoras y lugareñas a través de la organización Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS). Además, establecieron alianzas con medios de comunicación, juristas y otros grupos de la sociedad civil para mostrar el carácter transversal de esta cuestión.

Tras una protesta de 44 días que tuvo lugar en esa ciudad, el Gobierno local —y posteriormente el nacional— se vio obligado a tomar medidas. La Ley del Derecho a la Información se incorporó a la legislación en 2005.

La lucha para garantizar el cumplimiento de la ley en la práctica aún continúa, y muchas peticiones de información relacionadas con ella se rechazan o se estancan en procedimientos burocráticos de difícil comprensión y acceso. Algunas personas que han solicitado información con arreglo a esta ley han sido objeto de agresiones o prohibiciones. Este sigue siendo el eje prioritario de la campaña.

Fuente:

[“20 Years of the Right to Information Movement”](#), NDTV
[Ley del Derecho a la Información, 2005](#) (en inglés)

Australia: Ganar confianza para alzar la voz

Shaylem Wilson, orgullosa de su pertenencia al grupo tribal ngarrindjeri, vive en la región de Kurna, en Adelaida (Australia Meridional).

Su comunidad está sobrerrepresentada en el sistema penal y de acogida de menores, e insuficientemente representada en los espacios políticos, por lo que Shaylem cree firmemente en la libre determinación y en que los pueblos de las Primeras Naciones emprendan iniciativas para lograr cambios para sí mismos.

“Estoy entregada a cerrar la brecha de desigualdad, y también a proporcionar a la gente de las Primeras Naciones los conocimientos y el poder para que lo haga por sí misma”, afirma Shaylem. Para ello, esta joven forma parte del equipo de acogimiento de menores de la organización Lutheran Care, que garantiza que los niños y niñas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que viven en centros asistenciales estén vinculados a su cultura. También se ha involucrado en la Cumbre de la Juventud de Uluru, que ha creado una red formada por jóvenes de Australia Meridional que constituyen la próxima generación y que ofrece a “los ancianos y ancianas” y las personas de edad avanzada un espacio donde transmitir sus conocimientos.

Shaylem también considera que es muy importante que las jóvenes aborígenes, incluida ella misma, encuentren su voz: “Creo que, vistas desde adentro, las comunidades indígenas están dominadas por los varones; hay muchos hombres que han marcado el rumbo en el pasado. Me parece importante que se haga de forma igualitaria”.

Cuando surgió la oportunidad, Shaylem participó en Straight Talk, un programa que apoya a las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres a introducir cambios positivos a través de la participación política. La asistencia a cumbres, la relación con otras mujeres y el intercambio de conocimientos y habilidades le han dado la confianza necesaria para decir lo que piensa sobre las cuestiones que afectaban directamente a su pueblo o a ella misma, y no le preocupan tanto las críticas de las demás personas, ya sean hombres aborígenes, u hombres o mujeres blancos.

Shaylem lo explica así: “Antes de llegar a Straight Talk, no sabía mucho sobre los sistemas políticos; solo sabía que perjudicaban a los pueblos de las Primeras Naciones. Ha sido importante que otras mujeres indígenas hablasen de su carrera política o de su recorrido en el sistema político, de la manera en que lo han utilizado para avanzar ellas mismas y hacer avanzar a su pueblo. Ha sido increíble escucharlas y aprender de ellas”.

Más información en:

[Programa Straight Talk, Oxfam Australia](#)

Ghana: Sensibilizar a la ciudadanía para influir en las decisiones sobre el gasto público

Pese a que quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala representan el 60% de la población activa de Ghana, es muy común que sus voces se vean marginadas de los procesos políticos y presupuestarios del país. Como consecuencia, muchas de estas personas carecen de acceso a variedades de semillas mejoradas, fertilizantes, sistemas de riego, servicios financieros, crédito o la ayuda experta que necesitan para aumentar el rendimiento y el valor de su producción.

Para poder abordar este problema, 10 organizaciones de la sociedad civil de Ghana, entre ellas Oxfam, lanzaron la campaña Oil4Agric para defender que la agricultura a pequeña escala sea una de las principales prioridades del Gobierno respecto a la inversión de los ingresos obtenidos del petróleo y el gas. En la campaña se pedía que el gasto en agricultura aumentara del 8,5% al 14,1% del PIB y se centrara en las áreas que más beneficiaran a los productores y productoras a pequeña escala.

La campaña logró un enorme apoyo público en todo el país. Una sencilla petición de apoyo a través de teléfono móvil de Oil4Food se difundió en los periódicos, la televisión y la radio, en actos públicos tales como debates estudiantiles y encuentros campesinos, y en las redes de Facebook, Twitter e Instagram de las celebridades. Las organizaciones campesinas reunieron más de 20.000 firmas en 300 comunidades de 30 municipios, acudiendo a ellas para explicar la campaña y pedir apoyo, y facilitando una petición impresa en papel para que quienes no sabían leer ni escribir pudieran estampar su huella dactilar.

Se involucró directamente al Ministerio de Hacienda, las comisiones parlamentarias y los diputados y diputadas, y la campaña contribuyó al proceso de elaboración del presupuesto nacional destacando los beneficios potenciales que esa inversión supondría para el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Como resultado de todo ello, en el presupuesto de 2014 se mantuvo la agricultura como uno de los cuatro sectores prioritarios para invertir los ingresos petroleros, y se asignó el 15% de los ingresos previstos (409 millones de dólares estadounidenses) a la agricultura, y especialmente a la “agricultura orientada a combatir la pobreza”. Además, el Gobierno de Ghana promulgó leyes para garantizar un sistema transparente y permanente de divulgación, gestión y asignación de los ingresos derivados del petróleo. Ahora, la campaña está centrada en conseguir que se promulgue una ley similar para garantizar que los ingresos procedentes del sector de la minería se destinen a apoyar la agricultura a pequeña escala.

Estados Unidos: Trabajar con la ley para cambiar actitudes y opiniones

La campaña para conseguir el matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo en todos los estados de Estados Unidos fue, en parte, una campaña jurídica que comenzó con la desestimación de una causa en la Corte Suprema del país en 1972 y cobró impulso en los tribunales de Hawái en 1993 y, posteriormente, en otros palacios de justicia y cámaras parlamentarias de toda la nación. El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos hizo historia al convertir el matrimonio igualitario en derecho de aplicación general.

Durante la campaña se extrajeron lecciones importantes.

Se hizo evidente que, para lograr la victoria en todos los estados, era necesario contar con un amplio apoyo ciudadano. A partir de ese momento, el movimiento cambió el mensaje: el matrimonio homosexual no se refería exclusivamente a los derechos y responsabilidades, se refería al amor. Quienes mejor podían transmitir el mensaje no eran las parejas del mismo sexo, sino los padres, madres, abuelos y abuelas de personas LGBTQIA+ que llevaban décadas casados. Fue una estrategia con la que todo el mundo se identificaba. El movimiento por el matrimonio igualitario había encontrado una manera de transformar la actitud y opinión de la gente.

Esta campaña la llevó a la práctica una sólida red de organizaciones diversas, entre ellas un consorcio de fundaciones de financiación, grupos de activismo tales como las campañas Freedom to Marry y Marriage Equality USA, personas con liderazgo y defensoras de la causa, personas aliadas heterosexuales, cargos electos, celebridades y, sobre todo, centenares de miles de personas activas a nivel local.

No obstante —pese a que esta victoria histórica beneficiaba a quienes deseaban casarse con alguien del mismo género y, por tanto, garantiza los derechos jurídicos y los privilegios que conlleva hacerlo—, desde una perspectiva feminista interseccional, la lucha por el matrimonio igualitario (aunque importante) no resultó tan significativa para las personas LGBTQIA+ que sufrían pobreza, racismo, sexismo, homofobia, transfobia y otras formas de discriminación que aumentan su vulnerabilidad ante diversos perjuicios sociales. El mensaje de “el amor es el amor” caló, pero muchas personas de la comunidad opinaban que la justicia económica y racial era sin duda más urgente y estaba en gran medida ausente de las conversaciones en torno al matrimonio igualitario. En última instancia, las prioridades de la campaña reflejaban las de quienes la financiaban y dirigían, algo que, aunque no es inusual, sigue suponiendo un riesgo para muchas campañas que intentan lograr cambios sociales en nombre de una población amplia y diversa.

Afortunadamente, algunos actores clave de la campaña —como la iniciativa Human Rights Campaign (HRC)— han aprovechado el impulso y los recursos generados por la lucha por el matrimonio igualitario para hablar sobre las desigualdades sociales que siguen sufriendo quienes forman parte de la comunidad LGBTQIA+. El gran consenso alcanzado sugiere que es una batalla menos que librar en adelante, y también un importante precedente que puede servir de base para las futuras disputas legales en favor de los derechos de las personas LGBTQIA+ en Estados Unidos y otros países.

Más información en:

[Sitio web de Freedom to Marry](#)

[Sitio web del Fondo Proteus](#)

[Sitio web del Brennan Center for Justice](#)
[Sitio web de Marriage Equality USA](#)

Reino Unido: Campaña para dar visibilidad a una cuestión que pasa desapercibida

En 2018, Katy Styles se dedicaba a tiempo completo a cuidar a su marido y, cada vez más, a su madre. Ella percibía que esta tarea esencial estaba completamente invisibilizada en Reino Unido. Millones de personas como ella brindan cuidados no remunerados a familiares, amistades o vecinos y vecinas que necesitan un apoyo adicional por su situación de discapacidad, enfermedad o edad, siendo las mujeres quienes normalmente asumen este rol y destinan más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado. Pese a que su contribución es esencial, las cuidadoras y cuidadores no remunerados siguen careciendo en general de apoyo y reconocimiento. Gran parte de estas personas sufre una enorme presión económica, física y emocional, y quienes proceden de grupos subrepresentados (como la población negra, de minorías étnicas, y LGBTQIA+) se enfrentan a obstáculos y problemas adicionales.

Katy consideraba que había que hacer algo para cambiar esta situación y se unió a otras personas que se encontraban en circunstancias similares para impulsar We Care, una galardonada campaña de base con sede en Reino Unido y cuyo objetivo es proporcionar a las cuidadoras y cuidadores no remunerados una plataforma para mejorar sus derechos y aumentar su reconocimiento: “Si nos unimos, tenemos voz. Si nos unimos, somos más fuertes. Si nos unimos, podemos generar cambios”.

Esta iniciativa ha llevado a cabo con éxito varias campañas digitales utilizando distintas tácticas. Por ejemplo, en 2018 encabezó una petición en favor de una estrategia nacional para las personas cuidadoras que recibió el apoyo de las organizaciones de apoyo a este sector, de cuidadoras y cuidadores particulares y de responsables de la toma de decisiones, y que se presentó al Parlamento británico.

We Care también viene utilizando el [artivismo textil](#) para que quienes se dedican al trabajo de cuidados no remunerado llamen la atención de las instancias decisorias. Su proyecto *Sticking Plaster Craftivism*, un proyecto artístico elaborado con curitas, se centra en la convicción de que estas personas son algo más que un mero parche que mantiene unidos los sistemas de salud y de asistencia social. Mediante este kit de artivismo, la campaña posibilitó que las cuidadoras y cuidadores enviaran una curita con una carta manuscrita a su diputado o diputada local.

En 2022, We Care también realizó una elocuente película con el objetivo de poner de relieve la realidad del trabajo de cuidados y su llamamiento al cambio, que ha servido para apoyar más campañas y movilizar a más cuidadoras y cuidadores. Además, trabaja directamente con las instancias decisorias, por ejemplo, aportando pruebas a las investigaciones públicas. El movimiento ha registrado un rápido crecimiento y ha adquirido visibilidad en las organizaciones de la sociedad, los medios de comunicación y los espacios de toma de decisiones.

Más información en:

[Sitio web de la campaña We Care](#)

Filipinas: Unirse a otros actores para promulgar una nueva ley

Juanday y Farhana eran amigos de la infancia y líderes universitarios en Maguindanao (Filipinas). Desde que iban a la escuela, habían presenciado matrimonios infantiles, precoces y forzados, así como actos de violencia contra las mujeres en su comunidad. En Filipinas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), una de cada seis niñas se casa antes de cumplir 18 años.

“No podemos negar que estas cuestiones nos resultan muy familiares, tanto en nuestras comunidades como en las escuelas. Comentamos algunas ideas con nuestros amigos y amigas y nos preguntamos por qué no poner en marcha iniciativas para abordar estos problemas. Con este fin, mi mejor amigo Juanday y yo misma, ambos líderes estudiantiles, decidimos formar una organización contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados”, explica Farhana.

En noviembre de 2020 fundaron la Maguindanao Alliance of Youth Advocates (MAYA), una red de líderes y lideresas estudiantiles de tres municipios de Maguindanao. En esta zona afectada por conflictos se registran muchos casos de matrimonio precoz.

Juanday, Farhana y sus amistades se sumaron al Creating Spaces Project y participaron en las sesiones de formación y sensibilización sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la violencia contra las mujeres. Todo ello les ayudó a materializar el concepto de trabajo voluntario y la generación de acciones en favor del cambio, y contribuyó a la constitución de la alianza y a ampliar la membresía juvenil de MAYA.

“Comenzamos en 2020 como organización, pero logramos encabezar varias iniciativas de incidencia y sensibilización en el marco del Creating Spaces Project a través de distintas plataformas. En primer lugar está el poder de las redes sociales: aunque estemos en casa, podemos seguir creando contenido sobre nuestro trabajo de incidencia y difundirlo en diferentes plataformas. En segundo lugar está la oportunidad de hacer difusión radiofónica todos los miércoles. Y, por último, MAYA se propone acudir a todos los hogares, especialmente a los que están en zonas remotas que carecen de conexión a Internet y acceso a la radio”, señala Farhana.

MAYA entró a formar parte de la alianza Girl Defenders' Alliance, que lleva años realizando trabajo de incidencia para poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado. Por fin, el 10 de diciembre de 2021, la cámara legislativa de Filipinas promulgó la denominada Ley de Prohibición de la Práctica del Matrimonio Infantil e Imposición de Sanciones en caso de Infracción.

Tras la victoria jurídica, el siguiente reto es garantizar la aplicación de esta ley, y eso llevará tiempo: “La lucha contra el matrimonio infantil no es una conquista rápida. Lo hacemos para la próxima generación”, añade Juanday.

La iniciativa Creating Spaces Project, impulsada por la organización juvenil United Youth of the Philippines-Women (UnYPhil-Women), cuenta con el apoyo de Oxfam gracias a financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.

Más información en:

[“Oxfam, ‘Girl Defenders’ alliance laud passage of anti-child marriage law”](#)

[“The Future of BARMM: Students stand up against child marriage”](#)

Make Change Happen – Oxfam – The Open University – OpenLearn Create
<https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=11559>

Sudáfrica: Estudiantes utilizan las redes sociales para impulsar la agenda política

#FeesMustFall es un movimiento sudafricano de protesta por el incremento de las tasas universitarias dirigido por estudiantes que surgió a mediados de octubre de 2015. Las protestas estallaron inicialmente en la Universidad de Witwatersrand, históricamente de estudiantado blanco, contra una propuesta de incremento del 10% de las tasas de matriculación. El descontento se extendió rápidamente a través de las redes sociales a muchas universidades de estudiantado negro y a la Universidad de Ciudad del Cabo. Las y los estudiantes se movilizaron en las calles, ocuparon edificios, y se reunieron con las autoridades para expresar sus quejas. El despliegue policial en los recintos universitarios — y la forma violenta con la que trataban a quienes se manifestaban— derivó en que las protestas pacíficas se volvieran a menudo violentas. Un gran número de estudiantes fue detenido o resultó herido, y se produjeron daños materiales.

Al principio, el movimiento mostró una gran unidad entre los distintos grupos de estudiantes, así como energía y tenacidad a la hora de dialogar con las autoridades: logró sensibilizar a la población y obtener su apoyo, y obligó al Gobierno a responder. El 21 de octubre de 2015, estudiantes de muchas universidades realizaron una marcha conjunta al Parlamento y, poco después, el presidente Zuma anunció que las tasas universitarias no aumentarían en 2016 y prometió más dinero para apoyar a quienes estuvieran en situación de mayor pobreza.

Tras haber logrado cambios de políticas y modificado el discurso nacional sobre los problemas de la educación superior —como la descolonización del currículo—, las protestas del #FeesMustFall constituyeron un punto de referencia para el activismo más allá de 2016. Sin embargo, para 2019, la mayoría de las protestas estudiantiles sobre cuestiones tales como las tasas de inscripción, el alojamiento y la ineficiencia del sistema de educación superior, así como otros problemas más amplios del programa nacional de subvenciones para el estudiantado en situación de mayor pobreza y de la clase trabajadora, pasó a tener lugar a nivel local, en algunas universidades. En la actualidad, conforme los movimientos han pasado de abordar problemas concretos a centrarse en cuestiones más interseccionales, la etiqueta #FeesMustFall ha dejado de ser el estandarte de las protestas que tienen lugar en todo el país sobre estas cuestiones.

Más información en:

["South Africa's Student Protests: Everything to Know About a Movement That Goes Back Decades"](#), *Global Citizen*, abril de 2021.

Bangladesh: Trabajar desde dentro para responder a una tragedia

En 2023 se cumplieron diez años del derrumbe del edificio Rana Plaza en el que 1132 personas, en su mayoría trabajadoras textiles, perdieron la vida. Fue una de las catástrofes más graves de la industria a nivel mundial. El Rana Plaza era un edificio comercial de Dhaka, la capital de Bangladesh, que albergaba cinco fábricas textiles. La tragedia puso de relieve la falta de medidas de protección que sufren los trabajadores y trabajadoras textiles de Bangladesh que fabrican ropa que se vende en todo el mundo. Los productos textiles representan más del 80% de las importaciones de bienes y servicios de este país, el segundo mayor exportador de ropa (tras China).

El [Acuerdo sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios en Bangladesh](#) se firmó y despachó unas semanas después de que se produjera esta catástrofe. Este acuerdo —que es un tratado jurídicamente vinculante entre empresas internacionales, comerciantes al por menor y sindicatos— contempla algunos avances muy importantes y sorprendentes, como un programa de inspección independiente; el compromiso por parte de las marcas firmantes de financiar mejoras y mantener las relaciones de suministro; comités de salud y seguridad elegidos de forma democrática en todas las fábricas; y el empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras a través de un amplio programa de formación, un mecanismo de denuncia y el derecho a negarse a realizar trabajos sin condiciones de seguridad. Diez años después, se han realizado cerca de 56 000 inspecciones de seguridad en más de 2400 fábricas textiles de Bangladesh y más de 140 000 mejoras en materia de seguridad.

Podemos señalar varios factores que explican el hecho de que esta espantosa tragedia impulsara una evolución rápida hacia una normativa mejor. Un foro sobre derechos laborales que existía en Bangladesh (la iniciativa de comercio ético Ethical Trading Initiative) ya había creado un elevado nivel de confianza entre antagonistas históricos (las empresas, los sindicatos y las ONG), lo que permitió que las personas se comunicaran entre sí de forma inmediata.

Ya se había hecho un trabajo previo de esbozar un posible acuerdo, y la catástrofe del Rana Plaza aumentó enormemente la presión para actuar en ese sentido y dio a las personas activistas algo que podían apoyar y en lo que podían basarse. Además, el activo liderazgo de dos sindicatos internacionales de reciente creación (IndustriALL y UNI Global Union) puso en contacto a las personas clave dentro de las organizaciones y empresas que realmente podían aplicar los cambios deseados. Y muchas de las propias empresas vieron el acuerdo como algo positivo ante su maltrecho prestigio y la presión que los consumidores y consumidoras efectuaban para que adoptaran medidas.

Pese a los aparentes logros, las y los activistas afirman que los trabajadores y trabajadoras textiles de Bangladesh siguen soportando condiciones económicas desfavorables y abusos contra sus derechos laborales como, por ejemplo, el hostigamiento por formar parte de un sindicato o la falta de compensación por las lesiones sufridas en el trabajo. Las mujeres siguen ocupando los puestos de categoría más baja y, según algunos cálculos, ocupan solo el 0,5% de los puestos directivos del sector textil. Un corpus creciente de evidencias muestra que las trabajadoras textiles sufren habitualmente acoso y abusos sexuales en el trabajo. Al mismo tiempo, los propietarios de las fábricas siguen teniendo problemas para cumplir las exigencias de las grandes marcas, y se exponen a retrasos en los pagos y a la anulación o reducción drástica de los pedidos sin aviso previo.

Fuente:

[*How Change Happens*, Duncan Green, 2016](#)

[Novela gráfica sobre la tragedia del Rana Plaza, Oxfam Canadá](#)

[Campaña *What She Makes* de Oxfam Canadá](#)

[Información actualizada obtenida en “Abuses ‘still rife’: 10 years on from Bangladesh’s Rana Plaza disaster”, *The Guardian*, abril de 2023](#)